

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	FRANCISCO JAVIER POSADA CASTAÑEDA
DEMANDADO	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES
RADICADO	05001-31-05-008-2020-00029-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Pensión de invalidez – compatibilidad con la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, intereses moratorios.
DECISIÓN	Confirma.

Medellín, siete (7) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede la Sala a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por el señor **FRANCISCO JAVIER POSADA CASTAÑEDA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**.

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 010**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ANTECEDENTES

Es materia de la Litis, decidir los recursos de apelación invocados por los apoderados judiciales de ambas partes, así como el grado jurisdiccional de

consulta a favor de COLPENSIONES, contra la sentencia que profirió el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín - Antioquia, en la audiencia pública celebrada el día 3 de octubre de 2022, dentro del proceso referenciado.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que el señor FRANCISCO JAVIER POSADA CASTAÑEDA, nació el 21 de enero de 1949, y cuenta en la actualidad con más de 70 años de edad, y en el año 2011 decidió reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, al no estar en condiciones económicas para seguir cotizando al sistema general de pensiones, prestación económica que le fue reconocida por el ISS hoy COLPENSIONES mediante resolución N° 8115 del 12 de abril de 2011, teniendo en cuenta para ello un total de 302 semanas cotizadas.

Señala que en el mes de noviembre de 2012, las condiciones económicas del actor mejoraron, permitiéndole reincorporarse al mercado laboral, y retomar los aportes al sistema general de pensiones, logrando así cotizar hasta el 30 de noviembre de 2019, un total de 338 semanas adicionales a las ya tenidas en cuenta por el ISS para el otorgamiento la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.

También expone el escrito introductorio que el actor padece varias patologías, tales como: diabetes mellitus, hipertensión esencial primaria, retinopatía diabética, síndrome del miembro fantasma con dolor, polineuropatía diabética, amputación traumática de 2 o más dedos del pie, y episodio depresivo moderado, que dieron lugar a una calificación de pérdida de capacidad laboral por parte de la junta médica de COLPENSIONES, quien le dictaminó una PCL del 50,44% de origen común, con fecha de estructuración del 20 de diciembre de 2018.

Que al contar el actor con más de 50 semanas cotizadas en los 3 años inmediatamente anteriores al 20 de diciembre de 2018, fecha de estructuración de su estado de invalidez, y recibir el pago de incapacidades hasta el 19 de enero de 2019, elevó reclamación ante COLPENSIONES el día 22 de abril de 2019, pero esta le fue negada a través de la resolución N° SUB-158621 del 19 de junio de 2019, bajo el argumento que las semanas cotizadas con

posterioridad al reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, son invalidas para efectos pensionales, y no pueden cubrir ningún tipo de riesgo, esta negativa fue confirmada a través de los actos administrativos N° SUB-180121 del 11 de julio de 2019 y DPE-7171 del 1 de agosto de 2019.

En desacuerdo con la negativa pensional, y acosado por las necesidades económicas propias y las de su núcleo familiar, interpuso una acción de tutela para procurar el amparo de su derecho fundamental a la seguridad social, pero esta acción constitucional le fue negada en ambas instancias.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial está dirigida a que SE DECLARE que al señor FRANCISCO JAVIER POSADA CASTAÑEDA le asiste derecho a una pensión de invalidez de origen común a cargo de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, en consecuencia, se CONDENE a esta última entidad, al reconocimiento y pago de esta prestación económica, en forma retroactiva a partir del 20 de enero de 2019 día siguiente pago de su última incapacidad, junto con las mesadas adicionales, los intereses moratorios del art. 141 de la ley 100 de 1993, y/o la indexación de las condenas, y las costas del proceso.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Admitida la demanda y corrido el traslado correspondiente, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, dio respuesta oportuna (carpeta 08 – expediente digital), manifestando a través de su apoderado judicial que son ciertos los hechos que aluden a la edad del demandante, el reconocimiento a su favor de una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, el número de semanas cotizadas, su estado de invalidez, la solicitud pensional elevada ante COLPENSIONES, así como la existencia y contenido de los actos administrativos expedidos por la entidad para dar respuesta a la solicitud y recursos formulados, sin que le consten los restantes supuestos facticos, como la acreditación del mínimo de semanas necesarias para causar una pensión de invalidez, los cuales deberán ser objeto de debate probatorio en la litis; se opuso a la prosperidad de todas y cada una de las pretensiones formuladas, proponiendo en su defensa las excepciones de mérito

que denominó: *“INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER LA PENSIÓN DE INVALIDEZ POR AUSENCIA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES; INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER INTERESES DE MORA; INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE RECONOCER LA INDEXACIÓN; PRESCRIPCIÓN; IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS; COMPENSACIÓN; DESCUENTOS EN SALUD, LA GENÉRICA”*.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En el fallo objeto de apelación y consulta, de fecha 3 de octubre de 2022, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ que, al señor FRANCISCO JAVIER POSADA CASTAÑEDA, le asiste el derecho a obtener el reconocimiento y pago de la pensión de Invalidez de origen común.

En consecuencia, CONDENÓ a COLPENSIONES a reconocer y a pagar al actor la suma de \$39.978.964 por concepto del retroactivo de la pensión de invalidez, causado entre el día 20 de abril de 2019, y el 30 de septiembre de 2022, y sobre dicha suma autorizó el descuento de los aportes a salud y la suma de dinero que haya pagado o se llegare a pagar en cumplimiento de la Sentencia de tutela proferida por la Sala Constitucional de Decisión del Tribunal Superior de Medellín el día 14 de enero del año 2020.

De otro lado, le ordenó a COLPENSIONES a continuar pagando al actor, a partir del 1º de octubre de 2022, una pensión de Invalidez en cuantía mínima, mientras subsistan las causas que dieron origen al reconocimiento de esa prestación, y sobre 13 mesadas anuales.

También CONDENÓ a COLPENSIONES a reconocer y pagar al actor los INTERESES MORATORIOS, del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, y a partir del 23 de agosto de 2019, sin que sea procedente la condena a la indexación solicitada en forma subsidiaria.

Finalmente impuso las COSTAS del proceso en la primera instancia a cargo de COLPENSIONES y en favor del demandante, fijando como agencias en derecho en la suma de \$3.000.000.

Como fundamento de su decisión, estimó la jueza de primer grado, que en el presente asunto no tiene cabida la tesis de la incompatibilidad entre la pensión de invalidez de origen común y la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, pues el actor después de haberle sido reconocida la indemnización, continuó cotizando al sistema general de pensiones, logrando reunir 50 semanas en los 3 años anteriores a la estructuración de su estado de invalidez, fundamentando su decisión en la sentencia de la Corte Constitucional T-626 de 2017.

Finalmente estimó que en el presente asunto si resulta procedente el reconocimiento de los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, al haberse presentado una mora injustificada en el reconocimiento pensional.

VI. RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Inconformes con la decisión de adoptada en primera instancia, los apoderados judiciales de ambas partes interpusieron su recurso de alzada, el cual sustentaron en los siguientes términos:

APELACIÓN PARTE DEMANDANTE: su apoderado judicial dice apelar la sentencia de primer grado en forma parcial, argumentando que la pensión de invalidez declarada judicialmente a favor del demandante debe otorgarse en forma vitalicia, pues al contar con más de 70 años de edad, COLPENSIONES ya no podría llamarlo a revisión.

APELACIÓN COLPENSIONES: su apoderada judicial solicita se revoque el reconocimiento pensional a favor del demandante, al considerar que las semanas incluidas en el cálculo de la indemnización sustitutiva no podían ser tenidas en cuenta para cumplir el requisito de las 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores a la estructuración del estado de invalidez, pues así lo tiene adoctrinado la jurisprudencia constitucional, citando para ello la sentencia C-674 de 2011, según la cual una persona no puede disfrutar de dos prestaciones que cumplan la misma función.

Insiste en su alzada, que al momento de estructurarse su estado de invalidez del actor, no se encontraba cubierto por ningún riesgo pensional, pues ya le había sido otorgada la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez,

motivos por los cuales solicita la revocatoria de la sentencia impugnada, y en su lugar se absuelva a COLPENSIONES de todas las pretensiones y cargos formulados en su contra.

Alegatos de conclusión.

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal correspondiente, el apoderado judicial de la parte demandante, presentó sus alegatos en segunda instancia, a través de los cuales solicita se confirme el reconocimiento pensional, toda vez que la procedencia y validez de las cotizaciones efectuadas con posterioridad al cobro de la indemnización por vejez, para efectos de cubrir el riesgo por invalidez como fundamento de la sentencia de primera instancia, fue una decisión respetuosa de la doctrina fijada tanto por la honorable Corte Constitucional (Sentencia T-656 de 2016 MP Luis Ernesto Vargas) como por la Corte Suprema de Justicia Sala Permanente de Casación Laboral (Sentencia del 19 de febrero de 2014, Radicación 46.194, M.P. Dr. Carlos Ernesto Molina Monsalve), al igual que la imposición de intereses moratorios cuyo sustento jurisprudencial se haya en la providencia del 19 de agosto de 2020, SL3130-2020, Radicación 66868, M.P. Dr. Jorge Luis Quiróz Alemán.

Sin embargo, insiste en el carácter vitalicio de la pensión de invalidez, con fundamento en el inciso final del artículo 10 del decreto 758 de 1990, pues al contar el actor con más de 73 años de edad, se entiende que por reunir los requisitos para conversión en pensión de vejez la prestación adquiere rango vitalicio.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, pasa la Sala a resolver previas las siguientes,

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Naturaleza jurídica de la pretensión. – Pensión de invalidez de origen común – compatibilidad con la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez:

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da

mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Teniendo en cuenta los recursos de apelación impetrados, así como el grado jurisdiccional de consulta que se surte a favor de COLPENSIONES, el cual implica una revisión integral de la sentencia de primer grado en lo desfavorable, los problemas jurídicos estriban en dilucidar: **i)** si el señor FRANCISCO JAVIER POSADA CASTAÑEDA era o no un afiliado obligatorio al régimen de prima media con prestación definida entre los meses de diciembre de 2015 y diciembre de 2018, **ii)** en caso afirmativo, se analizará si existe alguna incompatibilidad entre la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez reconocida y la pensión de invalidez de origen común que mediante esta acción judicial se debate, así como el carácter vitalicio de la misma, y **iii)** se resolverá finalmente la procedencia o no de los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993 sobre el eventual retroactivo pensional adeudado.

Para resolver la problemática suscitada, debemos partir necesariamente de los hechos probados e indiscutidos en el proceso entre los cuales se tienen los siguientes:

-Que según el registro civil de nacimiento visible a folios 15 del archivo PDF 01, el señor FRANCISCO JAVIER POSADA CASTAÑEDA nació el día 21 de enero de 1949, y cuenta en la actualidad con 74 años de edad.

-Que mediante resolución N° 8115 del 12 de abril de 2011, el ISS hoy COLPENSIONES le reconoció al demandante FRANCISCO JAVIER POSADA CASTAÑEDA una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, en cuantía única de \$3.526.713, teniendo en cuenta un total de 302 semanas cotizadas (folios 17 y 18 del archivo PDF 001).

-También está probado en el plenario que mediante dictamen del 4 de septiembre de 2019, la junta médica de COLPENSIONES calificó la pérdida de capacidad laboral del demandante FRANCISCO JAVIER POSADA CASTAÑEDA, concluyendo que este presenta una PCL del 50,44%, derivada de una enfermedad de origen común, con fecha de estructuración del 20 de diciembre de 2018 (folios 27 al 31 del archivo PDF 001), este dictamen quedo ejecutoriado a partir del 9 de abril de 2019 según lo certifica COLPENSIONES a folios 32 del archivo PDF 001.

-Que el día 22 de abril de 2019, el señor FRANCISCO JAVIER POSADA CASTAÑEDA le solicitó a COLPENSIONES el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez de origen

común, pero esta prestación le fue negada a través de la resolución N° SUB-158621 del 19 de junio de 2019 (fls. 40 al 44 del archivo PDF 001), bajo el argumento de haberse estructurado la invalidez con posterioridad al reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, y que por ello no existía cobertura frente a ese riesgo.

-Según certificación expedida por la EPS COOMEVA el demandante presentó varias incapacidades entre el 23 de abril de 2016 y el 19 de abril de 2019 (folios 59-60 del archivo PDF 001).

*-Y finalmente con la HISTORIA LABORAL aportada por COLPENSIONES en su respuesta (carpeta 08), está probado que el señor POSADA CASTAÑEDA tiene en su haber un total de **673,71** semanas cotizadas durante toda su vida laboral, de las cuales **137,16** semanas se encuentran cotizadas entre el 20 de diciembre de 2015 y el 20 de diciembre de 2018, es decir, dentro de los 3 años inmediatamente anteriores a la estructuración del estado de invalidez, sin incluir allí algunos periodos cotizados que fueron descartados por la entidad bajo la siguiente observación “NO VINCULADO ESTA PENSIONADO”, que le sumarían 21,42 semanas adicionales en ese mismo interregno de tiempo.*

Estando claro lo anterior, pasa la sala a resolver la primera problemática planteada, consistente en determinar la obligatoriedad o no de la afiliación de un trabajador al sistema general de pensiones para cubrir los riesgos de invalidez y muerte al cual le ha sido pagada la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.

Para dar respuesta al asunto, debemos remitirnos en primer lugar a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 3° de la Ley 797 de 2003, que regula lo relativo a los afiliados obligatorios al sistema general de pensiones, así:

“ARTÍCULO 15. AFILIADOS. <Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Serán afiliados al Sistema General de Pensiones:

1. En forma obligatoria: **Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo** o como servidores públicos. Así mismo, las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad de servicios que adopten, los trabajadores independientes y los grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales.

(...).”

A su vez el art 17 ibídem dispone que:

ARTÍCULO 17. OBLIGATORIEDAD DE LAS COTIZACIONES. *<Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 797 de 2003. Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen.*

La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente.

Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida continuar efectuando el afiliado o el empleador en los dos regímenes.

Como puede verse de las normas transcritas, toda persona con capacidad de pago debe estar obligatoriamente afiliada al sistema de pensiones, capacidad de pago que la norma hace depender del vínculo laboral como dependiente, o bien de la calidad de trabajador independiente siendo clara la última de ellas en que en vigencia del contrato de trabajo deben efectuarse cotizaciones al sistema salvo si el trabajador reúne los requisitos para acceder a la pensión de vejez, se pensiona anticipadamente o se pensiona por invalidez.

EL CASO CONCRETO:

Como ya se sabe y no es motivo de controversia, la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, luego de haberle otorgado una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez al demandante con base en 302 semanas cotizadas a través del empleador “METÁLICAS PELDAR”, volvió a recibir aportes pensionales a favor del señor FRANCISCO JAVIER POSADA CASTAÑEDA en su condición de trabajador dependiente al servicio de los empleadores: “ESTILO EMPRESARIAL S.A.”, “COMPLEMENTOS HUMANOS” y “VITELCO DE COLOMBIA”, quienes en virtud de lo dispuesto en el art. 22 de la Ley 100 de 1993, le cotizaron un total de 371,71 semanas entre el 1° de noviembre de 2012 y el 31 de octubre de 2020, en cumplimiento de la obligaciones causadas durante la vigencia de la relación laboral.

Resalta la Sala, que la entidad accionada negó la pensión de invalidez deprecada, bajo el falaz argumento, según el cual, el riesgo de la invalidez no

estaba cubierto por haberse estructurado con posterioridad al reconocimiento de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, desconociendo con ello que la pensión de invalidez del actor se causó con las semanas cotizadas entre el **20 de diciembre de 2015 y el 20 de diciembre de 2018**, fecha de estructuración de su estado de invalidez, y que la indemnización sustitutiva se causó con las semanas cotizadas hasta el año 1972.

Sumado a lo anterior, advierte la Sala que no se avizora ninguna limitante, prohibición o restricción alguna para aquella persona que, reincorporada a la fuerza laboral y por ende reactivada su obligación de efectuar aportes al sistema general de pensiones, deba ser excluida del sistema, aunado a que podía, pese a haber recibido la indemnización sustitutiva de la PENSION DE VEJEZ asegurar otras contingencias también protegidas por el sistema general de pensiones, como la invalidez o la muerte, situación que fue la que aconteció en el presente asunto.

Y es que aunque las regulaciones anteriores a la Ley 100 de 1993 (concretamente, el artículo 13 del Decreto 3041 de 1966) señalaban que quienes aceptaban la indemnización sustitutiva no podían seguir cotizando válidamente al sistema general de pensiones, en el sistema actual no contempla expresamente esa prohibición.

Esto implica que quien recibió una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez puede seguir cotizando al sistema pensional válidamente con el objeto de cubrir riesgos diferentes, como la invalidez, como pasara a exponerse.

Compatibilidad de la indemnización sustitutiva de una pensión de vejez, con la pensión de invalidez de origen común:

Para resolver este punto, baste con decirse que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha resaltado que, a la luz de la filosofía y los principios del Sistema General de Seguridad Social, el reconocimiento que se haga de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez no afecta la eventualidad del derecho a la pensión de invalidez por cuanto se trata de dos beneficios legales diversos, que buscan amparar riesgos disímiles y, por tanto, se soportan en exigencias legales diferentes, por lo que nada se opone para

que respecto de un afiliado, que no reunió en su momento los requisitos de la pensión de vejez y, por ello, se le cancele la citada indemnización sustitutiva, cause una pensión por la contingencia de la invalidez.

Así lo indicó desde en la sentencia del 16 de agosto de 2015, Rad. 45.857, que se acompasa entre otras con la sentencia del 20 noviembre de 2007, rad. 30.123, en la que se indicó que la afiliación al Sistema Pensional no desaparece con el pago de la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos en RAIS, veamos:

“...A juicio de la Sala, no constituye impedimento alguno para acceder a la pensión de invalidez por riesgo común, el hecho de que el afiliado hubiera recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, pues si bien es cierto que de conformidad con lo previsto en el literal d) del artículo 2º del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año, están excluidos del Seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte, entre otras, las personas que “hubieren recibido la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o de invalidez por riesgo común”, ello no debe entenderse que dentro de ese grupo se encuentren aquellos con posibilidades de beneficiarse con una pensión por riesgo distinto al que corresponde a la indemnización sustitutiva.

*Más bien, frente a la comentada norma, lo que es pertinente afirmar es que quien recibió la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, estaría excluido del seguro social obligatorio por esa misma contingencia, pues a nada se opone que un afiliado, que no reunió en su debido momento los requisitos para acceder a la pensión de vejez, y por ende se le cancele la citada indemnización, **pueda seguir asegurado para otro tipo de contingencias, como la invalidez, situación que fue la que aconteció en el presente asunto.***

Resulta contrario a los más altos postulados de justicia, que una persona que reúne los requisitos para tener derecho a la pensión de invalidez, con fundamento en las normativas que gobiernan su situación para el momento en que se estructuró su condición de inválida, pierda tal beneficio económico por la sola circunstancia de que otrora se le negó la pensión de vejez, por no haber cumplido los requisitos de semanas cotizadas, pues se trata de dos prestaciones completamente diferentes, que amparan diversos riesgos, y con exigencias disímiles.

Además, advierte la Sala, que proceder en la forma como lo sugiere el ISS, conduce, ni más ni menos, a que un trabajador pese a no llenar las exigencias legales para cubrir un riesgo (vejez), y satisfacer los requisitos para otro (invalidez), como aquí ocurre, pierda el cubrimiento de ésta última contingencia, porque ello sería tanto como prohibir un total y absoluto desamparo, con flagrante desconocimiento, no sólo de aquellos principios que irradian el derecho a la Seguridad Social (art. 48 de la C.P.), sino además su desarrollo legal, o del Sistema de

Seguridad Social integral, como son la solidaridad, universalidad, integralidad, participación, unidad y eficiencia.

En verdad, una exégesis restrictiva en ese sentido, significaría desconocer la no querida probabilidad de que quien recibe una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, no pueda invalidarse más adelante, sumándole la desprotección del Sistema frente a ese infortunio que, no puede ignorarse, le impide al inválido procurar su propio sustento, ante la pérdida de su capacidad laboral en el porcentaje previsto en la Ley...” (Negrillas y Subrayas de la Sala)

En ese mismo sendero, recientemente, el órgano de cierre en la providencia CSJ SL1075-2022 con referencia en las CSJ SL2991-2020; CSJ SL514-2020 y T-307 de 2021, acentuó que un entendimiento distinto al referido, conllevaría a una afrenta del derecho a la seguridad social y a los principios de solidaridad, universalidad, integralidad, participación, unidad y eficiencia que inspiran el sistema, pues implicaría desconocer la probabilidad de que quien recibe una indemnización sustitutiva de pensión de vejez, no pueda luego acceder a un trabajo dependiente o por cuenta propia, lo que abriga ineludiblemente su afiliación al sistema de seguridad social.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez se financió con las cotizaciones realizadas hasta el año 1972 y la pensión de invalidez en cambio, se construyó con las nuevas cotizaciones realizadas entre diciembre de 2015 y diciembre de 2018, resulta ostensible para esta colegiatura que en el caso bajo análisis se dan los presupuestos de ley para afirmar que el señor FRANCISCO JAVIER POSADA CASTAÑEDA causó el derecho a la pensión de invalidez de origen común por reunir los requisitos legales previstos en el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, y dado que estos fueron los razonamientos y la solución impartida por la juez de primer grado, la Sala CONFIRMARÁ, la sentencia venida en apelación y consulta en este aspecto puntual.

Carácter no vitalicio de la pensión de invalidez

Estima la Sala que no le asiste razón al apoderado judicial del demandante al solicitar la declaratoria del carácter vitalicio de la pensión de invalidez a favor del señor POSADA CASTAÑEDA con fundamento en el inciso final del art. 10 del acuerdo ISS 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año, normativa según la cual “...La pensión de invalidez se convertirá en

pensión de vejez, a partir del cumplimiento de la edad mínima fijada para adquirir este derecho...”

En primer lugar, porque dicho artículo se encuentra derogado, pues para la fecha en que se estructuró el estado de invalidez del demandante, el disfrute de la pensión de invalidez por riesgo común se encuentra regulado por la Ley 100 de 1993, arts. 40 y ss.

Y en segundo lugar, la razón o argumento más relevante para negar el carácter vitalicio de esta prestación económica, guarda relación con su propia naturaleza de la prestación, lo que significa que la pensión de invalidez no es definitiva, por el contrario, será temporal y subsistirá mientras estén latentes las causas que le dieron origen.

Y debido a esa naturaleza temporal de la pensión de invalidez que el art. 44 de la Ley 100 de 1993 estableció una revisión periódica del estado de invalidez, y por ello la entidad encargada de pagar la pensión puede solicitar la revisión del estado de invalidez del pensionado cada 3 años, con el propósito de ratificar, modificar o dejar sin efectos el dictamen que sirvió de base para el reconocimiento pensional y proceder a la extinción, disminución o aumento de la misma, si a ello hubiera lugar.

Revisión de la pensión que se encuentra avalada por la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, como puede verse en la sentencia SL3696-2021, M.P. IVÁN MAURICIO LENIS GÓMEZ donde se hizo claridad frente a las características propias de la pensión de invalidez, esto es, que se trata de una prestación revisable, provisional, y variable.

Corolario de lo anterior, no se acogerán los argumentos planteados por el recurrente y se confirmará lo resuelto en este sentido, por encontrarse ajustado a derecho.

Prescripción, disfrute y retroactivo pensional.

Estima la Sala que en el presente asunto no está llamada a operar la prescripción parcial de mesadas pensionales, toda vez que entre la causación

de la primer mesada pensional que lo fue el 20 de diciembre de 2018, y la fecha de la reclamación administrativa (22 de abril de 2019) no alcanzó a transcurrir el término trienal de prescripción regulado en materia laboral y seguridad social por los arts. 488 del CST y 151 del CPTSS, como tampoco entre esta última fecha y la de presentación de la demanda (21 de enero de 2020), por lo que deberá confirmarse lo resuelto en este sentido.

En cuanto al disfrute pensional, encuentra la Sala que la sentencia de primera instancia, se encuentra en consonancia con el art. 40 de la Ley 100 de 1993 y la jurisprudencia nacional, pues se declaró el disfrute de la pensión de invalidez desde su estructuración, pero se liquidó el retroactivo desde el día siguiente al pago de la última incapacidad temporal por parte de la EPS COOMEVA, y también se atinó a autorizar la deducción del aporte obligatorio con destino al subsistema de salud, en cumplimiento a lo previsto en el art. 143 de la Ley 100 de 1993.

El retroactivo pensional también se encuentra bien liquidado, pues se tuvieron en cuenta los salarios mínimos legales mensuales vigentes por los años 2019, 2020, 2021, y 2022, así como las 13 mesadas anuales que realmente le correspondían al actor, conforme lo ordenado en el acto legislativo 01 de 2005, por haberse causado su derecho pensional con posterioridad al 31 de julio de 2011.

Intereses moratorios

Y finalmente, la Sala también confirmará la condena a los intereses moratorios del art. 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 23 de agosto de 2019, es decir, a partir del primer día del quinto mes de haberse efectuado la solicitud pensional (22 de abril de 2019), pues ese día comenzaba a correr la mora de la administradora de pensiones, al haberse superado el plazo de cuatro (4) meses al que aluden el art. 9° de la Ley 797 de 2003 tratándose de pensiones de invalidez y sobrevivientes.

Lo anterior, por cuanto los argumentos aducidos por COLPENSIONES para negarle la pensión de invalidez al demandante FRANCISCO JAVIER POSADA CASTAÑEDA, no tienen ningún tipo de asidero legal o jurisprudencial,

por el contrario, la negativa fue arbitraria e injustificada, pues el actor logró demostrar el cumplimiento de los requisitos de estructuración del estado de invalidez, y densidad mínima de cotizaciones conforme lo reglado en el art. 1° de la Ley 860 de 2003, y era deber de la entidad accionada proceder con el pago oportuno de esta prestación, pues esa supuesta incompatibilidad, y/o no cobertura del riesgo, ya era pacífica la jurisprudencia nacional para la fecha en que se presentó la solicitud por parte del afiliado, y aunque sea cierto que se ha reconocido la existencia de algunas excepciones puntuales a la procedencia de los intereses moratorios¹, también lo es que estas no se configuran en el caso en estudio, en especial, porque: i) la negativa al reconocimiento del derecho no se profirió con apego minucioso a la ley vigente aplicable al caso concreto y, ii) la concesión judicial del derecho no obedeció a un cambio de criterio jurisprudencial que la administradora pensional no pudiera prever (CSJ SL1914-2019), esto es, que se hubiere presentado con posterioridad a la solicitud del afiliado. Motivos por los cuales resultaba procedente la condena en este sentido, y por ello se confirmará la decisión de la A Quo.

No existiendo más controversias contra la sentencia de primer grado que deban revisarse en virtud de los recursos de apelación o del grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES, la Sala la confirmará íntegramente.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la decisión proferida y la improsperidad de los recursos de apelación formulados por los apoderados judiciales de ambas partes, no habrá lugar a imponer costas procesales en la segunda instancia.

VIII. – DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la **SALA TERCERA DE DECISION LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

¹ CSJ SL704-2013; CSJ SL787-2013; CSJ SL10504-2014; CSJ SL13076-2014; CSJ SL10637-2015 CSJ SL15975-2015; CSJ SL2941-2016 y CSJ SL1914-2019.

PRIMERO: CONFIRMAR íntegramente la sentencia de primera instancia objeto de apelación y consulta de origen y fecha conocidos, según lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

TERCERO: En su oportunidad procesal, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

CUARTO: SE ORDENA la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA